

23ª SESION ORDINARIA DEL 16 DE JULIO DE 1858

Presidencia del Sr. Luque

PRESIDENTE

ARAOZ

SORIA

DURAN

GRAZ

RODRIGUEZ

FEIJOO

GORDILLO (D. José)

POSSE (D. F.)

GARZON

POSSE (D. Justiniano)

DARACT

LUCERO (D. C.)

FERREIRA

En el Paraná, Capital Provisoria de la Confederacion Argentina, á los diez y seis días del mes de Julio de 1858 reunidos en su Sala de Sesiones los señores Diputados anotados al margen, con inasistencia de los señores Gonzalez, Lopez (D. T.) y Valle, sin aviso, Comas y Condarco con él, el señor Presidente decla-

QUESADA

GARCIA

WARCALDE

NAVARRO

FUNES

CHENAUT

PARDO

ALVEAR

GUTIERREZ

ZUVIRIA

COLODRERO

GORDILLO (D. V.)

DIAZ RODRIGUEZ

ró abierta la sesion: el Secretario expuso que no estaba concluida el acta de la anterior, y se procedió á dar cuenta de los siguientes asuntos entrados en Secretaría:

1º Un proyecto del Excmo. Sr. Presidente de la Confederacion en que sometía á la consideracion del Congreso Nacional un proyecto

de ley por el que se autorizaba al Poder Ejecutivo para contratar por cinco años varias líneas de vapores.

Pasaron estos documentos á la Comision de Hacienda.

2º Otro mensaje del mismo señor Presidente á que adjuntaba un proyecto de ley, creando la plaza de escribiente de la Administracion de Rentas de la Provincia de Santa Fé, cuya creacion le habia sido propuesta por el jefe de esa Aduana, manifestando la imposibilidad en que se hallaba esa oficina de atender con toda regularidad el servicio que le está asignado.

Pasó este asunto á la misma comision.

3º Una nota del señor Presidente del Senado en que recomendaba á la Honorable Cámara haber tomado éste en consideracion en su sesion del 10 del corriente el proyecto de ley que le fué pasado en revision determinando la forma en que el Congreso debía contestar al discurso de apertura, del Presidente de la Confederacion, y habia tenido á bien modificarlo en los términos que aparecian del adjunto.

Pasó este asunto á la Comision de Legislacion.

4º Otra nota del mismo origen en que comunicaba á la Honorable Cámara, que la de Senadores en sesion de 14 del corriente habia tomado en consideracion el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la apertura, conservacion y seguridad de un camino carretero entre las Capitales de Santa Fé y Santiago, y habia tenido á bien modificarlo como se notaría en el adjunto.

Pasó este asunto á la Comision de Hacienda.

5º Otra nota del mismo señor Presidente en que comunicaba que el Honorable Senado habia sancionado nuevamente, por más de dos tercios de votos, todas las adiciones y correcciones, que tuvo á bien hacer en el proyecto de ley que acuerda al señor Larguía una pensión anual de mil pesos para costear su educacion en Europa, en los ramos de arquitectura civil y escultura.

Pasó este mismo asunto á la misma Comision.

6º El dictámen de la Comision de Guerra aconsejando se aprueben las bases presentadas por don Vicente Casares sobre el establecimiento de luces en los bancos Ortiz y Chico.

7º El de la misma comision aconsejando se devuelvan al Poder Ejecutivo las solicitudes de los ciudadanos don Marcelino Freyre, don Nicasio Oroño, D. Patricio Cullen, D. José Iturraspe y doña Vicenta Galvez de Iturraspe para que ocurran donde corresponda.

8º Un proyecto de ley presentado por los señores Victorica, Ocampo y Lopez (don Ri-

cardo) en que se autoriza al Poder Ejecutivo para conceder á don Vicente del Castillo la jubilacion del empleo de Contador General de la Nacion, con el goce del sueldo íntegro, á contar desde la sancion de la presente ley.

Pasó este proyecto á la Comision de Hacienda.

9º Una solicitud presentada por los señores Jonquin San Miguel, Timoteo Gordillo y Cia., en que pedían al Congreso Nacional se les concediese la libre introduccion de trigos de Montevideo durante los meses que han de correr hasta la próxima cosecha, aduciendo en aquella las consideraciones en que se fundaba.

Pasó esta solicitud á la Comision de Peticiones.

Inmediatamente el señor Presidente expuso: que habiéndose vencido el período de la Presidencia debía la Honorable Cámara ocuparse de nombrar Presidente y Vice-presidente: y fijándose la proposicion á quién se nombra Presidente, resultaron 24 votos por el señor Luque y uno por el señor Ferreyra, resultando reelecto el señor Luque.

Los señores Victorica, Ocampo y Lopez (D. Ricardo) entraron á la sesion.

Se fijó la proposicion: ¿á quién se nombra Vice-presidente primero? y resultaron 24 votos por el señor Ferreyra, uno por el señor Warcalde, uno por el señor Feijoo y dos por el señor Alvear, quedando en consecuencia reelecto el señor Ferreyra.

Fijada la proposicion ¿á quién se nombra Vice-presidente segundo? resultó reelecto el señor Gonzalez por 21 votos, habiendo obtenido dos el señor Feijoo, tres el señor Alvear, uno el señor Soria y uno el señor Quesada.

Acto continuo el señor Presidente expuso, que siendo necesario integrar la Comision de Guerra por ausencia del señor Puch, la integraría el señor Lopez (D. Ricardo).

Se pasó á considerar la órden del día.

El señor Ministro de Justicia Culto é Instruccion Pública entró á la sesion, y se puso en discusion el artículo 6º del proyecto de ley de Justicia Federal, su tenor es el siguiente:

Art. 6º La Justicia comun de Provincia excluye á la Federal en los casos en que no se interesa la Constitucion ni ninguna ley nacional; pero no la excluirá cuando sea llamada la Federal á juzgar entre vecinos de diferentes Provincias, debiendo entonces decidir con arreglo á las leyes provinciales correspondientes.

El señor Garzon expuso que deseaba saber del señor Diputado informante, qué razon habia tenido en vista la Comision para modificar la última parte del artículo 6º de la Honorable Cámara de Senadores que prescribia que cuando la Justicia Federal entendiérase ó juzgase

entre vecinos de diferentes Provincias, debía hacerlo con arreglo á las leyes de la Provincia en que juzgue.

Que esta redaccion le parecia más propia que la del artículo propuesto por la Comision, que previene que en el caso expresado la Justicia Federal juzgue con arreglo á las leyes correspondientes; que si la palabra correpondiente hacia relacion á las leyes, se hacia poco favor á los Jueces al prevenirles que debían juzgar con arreglo á las leyes correspondientes, porque ellos debían saber cuales eran las que habían de aplicar en todos los casos.

El señor Funes: Que el objeto de esta ley no era determinar á qué jurisdiccion pertenecen los asuntos, porque no se trataba de crear el fuero, sino la jurisdiccion en general; que por lo mismo la Comision dejaba el fuero tal como estaba, y no había adoptado el artículo del Honorable Senado, porque podía llegar un caso en que no tuviese aplicacion, cuando no se pudiese juzgar por las leyes de la Provincia en que residiese el Tribunal Federal. Que un contrato, por ejemplo, debía juzgarse por las leyes de la Provincia en que se hacia, y que si en ésta se fijaba el 12 por ciento como máximo del interés y en la Provincia en que residía el Tribunal solo el 6, si ese Tribunal juzgaba con arreglo á las leyes de la Provincia en que residía, estaría obligado á declararlo nulo. Que le parecia bastante este ejemplo para que el señor Diputado se apercibiese de que podían llegar casos en que no tuviese aplicacion la prescripcion contenida en la última parte del artículo del Honorable Senado, y que era mucho más sencillo y conveniente prevenir que los Tribunales Federales juzgasen en esos casos por las leyes correspondientes. Que estas eran las razones que la Comision había tenido en vista para modificar el artículo 6º del Senado.

Despues de esto se suscitó un breve debate entre el señor Garzon que impugnó el artículo en su última parte, insistiendo en sus opiniones anteriormente vertidas, y los señores Freyre, Funes y el señor Ministro que lo sostuvieron.

El señor Navarro expuso: Que por este artículo y el anterior se absorbía completamente la Justicia de Provincia, porque no había una sola ley provincial que no tuviese alguna relacion con las leyes nacionales, desde que esas leyes habían sido dictadas con arreglo á las Constituciones Provinciales, y éstas en conformidad á la Nacional, origen y norma de todas las sanciones del Congreso. Que por otra parte, deseaba saber en qué condicion quedaria la Justicia de Provincia, cuando el Congreso, cumpliendo con el deber que la Constitucion le impone, hubiese dictado los Códigos que deben reglar todas las leyes en lo civil, comercial y criminal. Que se le expli-

case, pues, cuales serían las leyes provinciales, puesto que todas habían sido dictadas por el Congreso, quedando, en consecuencia, todas aquellas absorbidas por esos Códigos.

El señor Ministro de Justicia: Que el señor Diputado debía notar, que lo que se hacia en esta ley era descentralizar la administracion de Justicia; porque la Constitucion ha dicho en su artículo 97: «Corresponde á la Corte Suprema y á los Tribunales inferiores de la Confederacion el conocimiento y decision de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion, por las leyes de la Confederacion, y por los tratados con las naciones extranjeras, de los conflictos entre los diferentes poderes públicos de una misma provincia; de las causas concernientes á embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas del almirantazgo y jurisdiccion marítima; de los recursos de fuerza; de los asuntos en que la Confederacion sea parte; de las causas que se susciten entre dos ó mas Provincias; entre una Provincia y sus propios vecinos y entre una Provincia y un Estado ó ciudadano extranjero». Que siendo así, ¿qué era entonces lo que la Constitucion había dejado para las Justicias de Provincia?

El señor Navarro: Nada absolutamente.

El señor Ministro: Que si por el proyecto se dejaba, pues, á las Justicias de Provincia la 1ª instancia en todos los casos en que la Justicia Federal no tiene una jurisdiccion originaria, era claro, que lejos de restringir las atribuciones de aquellas, se ampliaban mas allá de lo que lo hace expresamente la Constitucion. Pero que el Congreso tiene derecho para hacerlo, en virtud del artículo 98 que expresa los casos en que la Corte Suprema debe ejercer una jurisdiccion originaria y exclusiva, expresando tambien que en los demás casos conocerá por apelacion segun las reglas que prescriba el Congreso; por cuya razon se dejaba la 1ª instancia en estos casos á la Justicia de Provincia, estableciendo además por el artículo que se discute, que *la Justicia comun de Provincia excluye á la Federal en los casos en que no se interesa la Constitucion ni las leyes nacionales*. Y el señor Ministro dijo: Ahora bien, señor, ¿qué mas se puede hacer en el propósito de descentralizar la administracion de Justicia? Pero se insiste en que cuando se dicten los Códigos por el Congreso, la Justicia Provincial quedará completamente absorbida por la Nacional, sin pensar que esos Códigos deben establecer á qué Tribunal pertenece el conocimiento en tales ó cuales asuntos, y que estas leyes que estamos dando hoy, deben formar parte de aquellos, porque como ellas, los Códigos se han de dictar conforme á los principios establecidos en la Constitu-

cion, y por consiguiente han de reconocer una soberanía nacional y otra provincial, sin destruir nada de lo hecho, y siguiendo el mismo régimen que establezcan las leyes nacionales, en virtud de las cuales no podrá la Justicia Federal intervenir en ciertos casos que son de la atribución exclusiva de la Justicia de Provincia. Además de eso, señor, ¿quién puede saber ahora como serán esos Códigos? Tal vez no serán como los actuales; tal vez esos Códigos solo contendrán grandes principios, dejando á los poderes de Provincia la facultad de legislar dentro de ellos. No nos hagamos, pues, un fantasma sobre esos Códigos que no pueden alterar el sistema establecido.

El señor García: Desea saber del señor Ministro si estamos de acuerdo en que los fallos de los Tribunales ordinarios de Provincia deben versar así en lo civil y criminal sobre los puntos regidos por el derecho común, los mismos que muy luego vendrán á ser materia del Código Federal. Digo esto porque es menester partamos de un punto fijo para poder determinar los casos en que la Justicia común de provincia excluya á la Federal y vice-versa.

La Justicia común de Provincia, dice el artículo, excluye á la Federal en los casos en que no se interesa la Constitución ni ninguna ley nacional. Supone, pues, el artículo que haya casos en que los fallos de las Justicias de Provincia no afecten la Constitución ni leyes nacionales; pero señores, yo no veo cuando pueda ocurrir el raro caso en que los fallos de las Justicias ordinarias de Provincia no afecten la Constitución ó leyes nacionales; no veo repito, ese caso porque no se me ocurre uno solo que, bajo tal condición ó carácter, pueda ser materia de juzgamiento ante las Justicias comunes de Provincia, debiendo todos ellos, por lo regular, versar como versan sobre puntos regidos ó bien por el derecho civil ó por el penal, comercial, etc.

La Constitución en su artículo 105, hablando de las atribuciones que las Provincias no pueden ejercer por haberlas delegado á la Confederación, dice: «no podrán dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Congreso los haya sancionado». La Constitución en estas palabras reconoce y dá al Congreso exclusivamente la facultad de legislar sobre esas materias á que ella se refiere; y una vez que el Congreso, en uso de esa facultad, dicte los Códigos, pregunto yo, señores, ¿en qué casos podrán juzgar las Justicias ordinarias de Provincia? ¿Sobre qué puntos podrán versarse sus fallos que no estén comprendidos en la Constitución ó leyes nacionales? ¿Cuando la Justicia de Provincia dejará de ser excluida por la Federal? Puede muy bien decirse que nunca; y entonces, se-

ñores ¿cuál es la existencia, cual la acción de ese poder? ¿Cuál su independencia y soberanía una vez que en ningún caso deja de ser excluida por la Justicia Federal? ¿Dónde el ejercicio de ese poder no delegado que la misma Carta les reconoce, una vez que el Congreso por una ley aniquile y haga desaparecer la acción de la Justicia común de Provincia, privándola de uno de sus mas preciosos é inherentes derechos, cual es conocer y decidir aquellas cuestiones que, bien pudiendo llamarse domésticas, se susciten en el seno de su familia?

Por otra parte, señores, ¿cuál será la ley sancionada por las legislaturas provinciales que no interese la Constitución ó leyes nacionales, ni aun cuando ella verse sobre impuestos ó cualquiera otra materia que pueda dar ocasión á un juzgamiento? De cierto que ninguna, puesto que la base de que parten esas leyes es ó debe ser las Constituciones Provinciales respectivas, que están en perfecto acuerdo con la Nacional de que son tomadas; por manera de que, debiendo las leyes provinciales interesar siempre á las Constituciones respectivas, es indispensable dejen de interesar la Constitución Nacional de que aquellas han tomado origen, como lo toman las leyes todas que con posterioridad á ella ha sancionado y en adelante sancionare el Congreso. Son éstas las razones en virtud de las que votaré contra el artículo.

El señor Funes: Cuanto ha dicho el señor Diputado para impugnar el artículo 6º es del todo inoportuno. Si alguna fuerza tuviesen sus razonamientos, sería mas bien para oponerse al artículo 5º; pero éste ya está sancionado por la Honorable Cámara. Por el artículo en discusión se dice, que la Justicia de Provincia excluye á la Federal en algunos casos, ¿cómo es que el señor Diputado deduce de él, que se invade la jurisdicción de Provincia? En la 2ª parte del artículo tan lejos de disminuirse la jurisdicción de Provincia, al contrario se le da mas extensión; pues se le concede el conocimiento de las causas, cuya decisión se atribuye por la Constitución á la Justicia Federal. Como si se tratara del artículo 5º, el señor Diputado se empeña en probar que todos los casos contenciosos serán de Justicia Federal; no advierte que tambien las Legislaturas de Provincia pueden dictar leyes en su jurisdicción local. Bien, en todos los casos que puede dictar leyes la Legislatura de Provincia, corresponde el conocimiento de las causas á la Justicia de Provincia; por último, si el señor Diputado considera que por la Constitución no se deja á las Provincias materia sobre que legislar, en tal caso el defecto estaría en la Constitución y por consiguiente sería inútil discutir sobre

sus prescripciones, no estando facultado para poder reformarlas en manera alguna. Para sostener el artículo en discusion basta reconocer el incuestionable principio, que en cuanto el Congreso Federal tiene facultades para legislar, en la misma extension tiene sus atribuciones para juzgar la Justicia Federal.

El señor Ministro adujo algunas otras observaciones en favor del artículo, explanando las que habia emitido anteriormente.

Se sometió á votacion el artículo 6º y fué aprobado.

Se puso en discusion el artículo 7º. No se hizo observacion á él, y fué aprobado por unanimidad; su tenor es el siguiente:

Art. 7º La Justicia Federal jamás procede de oficio, ni puede ejercer su jurisdiccion sino en los casos contenciosos en que es requerida á instancia de parte.

Se puso en discusion el artículo 8º, su tenor es el siguiente:

Art. 8º El Poder Ejecutivo Nacional prestará la fuerza necesaria á la ejecucion de las sentencias de la Justicia Federal en todo el Territorio de la Confederacion.

El señor Navarro expuso: Que deseaba saber de qué fuerza nacional se habian de valer los Tribunales Federales en las ciudades donde no la habia, y si no sería mejor, como lo habia establecido el Honorable Senado, imponer á los Gobernadores de Provincia la obligacion de prestar la fuerza necesaria como agentes naturales del Gobierno Nacional.

El señor Presidente expuso: Que continuaria la discusion despues de un cuarto intermedio á que se pasó inmediatamente.

Vueltos los Sres. Diputados á sus asientos el señor Funes dijo: Que habia pedido la palabra para expresar las razones que habian movido á la Comision á modificar el artículo sancionado por el Honorable Senado, y satisfacer al mismo tiempo las explicaciones que habia pedido un señor Diputado antes de pasar á cuarto intermedio. Que se habia preguntado cuales eran las fuerzas con que debían contar los Tribunales Federales para hacer cumplir sus fallos en las Provincias donde no habian fuerzas nacionales. Que era sabido que cuando se trataba de sostener la Constitucion y las leyes que ella establece, todos estaban obligados á prestar su cooperacion para hacerlas cumplir; que por consiguiente, aunque el proyecto del Honorable Senado establecia que los Gobernadores de Provincia prestarían la fuerza necesaria á la Justicia Federal para hacer cumplir sus fallos, la Comision no habia trepidado en modificarlo porque lo creía inútil en esa forma, y porque en el caso de que los Jueces Federales quisieran valerse de fuerzas

nacionales tal vez algun gobernador de Provincia creería que se usurpaban sus atribuciones. Que por otra parte, no era necesario esa prescripcion para que los Gobernadores de Provincia, agentes naturales del Gobierno Nacional, les prestasen la fuerza necesaria. Que por estas consideraciones la Comision habia creído conveniente modificar dicho artículo de manera que, todas las autoridades estuviesen obligadas á prestar auxilio á los Jueces Federales siempre que lo solicitasen. Que al establecerse los Tribunales, el Ejecutivo Nacional dirigiria circulares, como era natural, prescribiendo el respeto y auxilio á la Justicia Federal.

El señor García: Que desearia mas bien que se impusiera á los Gobernadores de Provincia la obligacion de prestar á los Jueces Federales la fuerza que necesitasen, porque habia ciertos casos muy urgentes en que no se podia ocurrir sin demora al Gobierno Nacional, y era conveniente se les diese el derecho de exigir esa fuerza de los Gobernadores, para que alguna vez no quedasen burlados sus fallos por falta de medios para hacerlos ejecutar.

Despues de algunas explicaciones dadas por el señor Funes y el señor Ministro sobre el artículo en discusion, en el sentido de las que acababa de aducir el primero, se sometió á votacion el artículo 8º, y fué aprobado por unanimidad.

Se puso en discusion el artículo 9º, que es el siguiente:

Art. 9º En los casos en que fuesen parte individuos, corporaciones, Provincias y la misma Confederacion se reputarán como un solo individuo para la administracion de la Justicia Federal ante los Tribunales.

El señor Araoz expuso: Que si mal no recordaba la Comision habia modificado el artículo 9º del Honorable Senado y deseaba oír del miembro informante algunas explicaciones sobre esa modificacion.

El señor Funes pidió se leyese el artículo 9º del proyecto de la Honorable Cámara de Senadores, y leído que fué expuso: Que, como notaría el señor Diputado, la modificacion hecha por la Comision era de mera forma, pues solo habia adoptado una redaccion mas suscita; porque como el artículo de aquella Honorable Cámara decía: «Ante la Justicia Federal pueden ser parte individuos, corporaciones, Provincias y la misma Confederacion», y esto no era una novedad, la Comision habia creído inútil esa redaccion para el objeto de la ley, y mas claro y lacónico decir: «En los casos en que fuesen parte individuos, corporaciones, Provincias y la misma Confe-

deracion, se reputarán como un solo individuo para la administracion de la Justicia Federal ante los Tribunales.

El señor Araoz: Que estaba satisfecho puesto que no se había tocado á la esencia del artículo y solo se había hecho una variacion de forma.

No haciéndose mas observaciones, se procedió á votar el artículo 9º y fué aprobado por unanimidad.

Se puso tambien en discusion y fué aprobado sin variacion alguna el siguiente artículo 10.

Art. 10. La Justicia Federal es independiente en el ejercicio de sus funciones de todo otro poder, sea nacional ó provincial.

Se puso en discusion el siguiente artículo:

Art. 11. La accion de la Justicia Federal es extensiva á las atribuciones del Poder Legislativo, de suerte que en cuanto éste puede legislar podrá juzgar aquella.

El señor Zuviria expuso: Que creía que este artículo debía suprimirse por inútil, porque era sabido que el Poder Judicial tiene facultad y obligacion de aplicar todo lo que se legisle en conformidad con la Constitucion. Que por consiguiente, ese artículo era á su juicio completamente inútil.

El señor Ferreyra: Que la Comision lejos de creer inútil este artículo, lo estimaba muy conveniente, porque si era cierto que ya estaban determinadas por la Carta las atribuciones del Poder Judicial, no lo era menos que debía establecerse de un modo claro y terminante que la Justicia Federal podia extenderse á todos los casos de la ley; porque las leyes nunca podian pecar por ser claras. Que no faltaría además quien pudiera dudar si la Justicia Federal podia extenderse á todos los actos comprendidos por la ley. Que no siendo, pues, ésta una redundancia que pudiera perjudicar, sino más bien completar el pensamiento de la Constitucion, la Comision había creído conveniente conservar dicho artículo en la ley que se consideraba.

El señor Garzon: Que en todo conforme con el artículo en discusion, votaría en favor de él; pero que desearía que se salvase un error que él consideraba de pluma, sustituyéndose la palabra *extensiva* con la de *coextensiva* que estaba consignada en el artículo del Honorable Senado, y que le parecía mas adecuada para expresar el pensamiento del artículo, porque con ella se significaba con precision que la Justicia Federal se extendía tanto cuanto el Poder Legislativo en sus atribuciones.

El señor Ferreyra: Que él daba un sentido distinto á la palabra *coextensiva*, porque ella indicaba mas bien que las dos jurisdicciones se ejercerían á un mismo tiempo, lo que no podia suceder en el caso de que se trataba, porque la Justicia Federal no podia ejercer su jurisdiccion hasta despues de sancionada una ley; que por consiguiente, era mas bien inoportuna que adecuada la que proponia el señor Diputado, consignada en el artículo de la Honorable Cámara de Senadores, y era por esto que la Comision había creído conveniente sustituirla.

El señor Gutierrez adujo algunas explicaciones sobre el sentido en que debía tomarse la palabra *coextensiva*, manifestando que estaría por la conservacion de ella en el artículo, porque era mas propia que la de *extensiva*, con que la había sustituido la Comision para expresar la idea que aquel comprendía.

El señor Funes manifestó las razones que la Comision había tenido para sustituir esa palabra en el artículo, con la de *extensiva* que expresaba la misma idea que el del Senado, aduciendo tambien el señor Ministro algunas explicaciones para manifestar el motivo para consignar la palabra *coextensiva* en su proyecto, pero que, sin embargo, estaba conforme con la modificacion hecha por la Comision.

Se procedió á votar el art. 11 y fué aprobado.

Se pasó á considerar el capítulo 2º, referente á la Suprema Corte de Justicia y se puso en discusion el siguiente:

Art. 12. La Suprema Corte de Justicia será compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales, que residirán en la Capital, conforme al art. 91 de la Constitucion.

El señor Ministro de Justicia dijo: Creo conveniente explicar lo que importa este artículo tal como ha sido sancionado por el Honorable Senado. Este artículo, señor, aunque establece como el que se discute, que la Suprema Corte sea compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales, permite, sin embargo, que ese Tribunal pueda funcionar con la simple mayoría de sus miembros y un Fiscal. El Honorable Senado al sancionar el art. 12 en esa forma, ha tenido en vista sin duda que en todos los cuerpos colegiados, como lo es la Corte Suprema, basta una simple mayoría para sancionar, y ha querido evitar que ese Tribunal pueda llamarse Corte Suprema ni decidir asunto alguno, mientras no estén presentes sus nueve Jueces. Deseo, pues, que la Honorable Cámara acepte el artículo sancionado por el Honorable Senado, ó que se fije en el que se discute con qué número de

Jueces podrá funcionar la Suprema Corte, porque este punto no puede quedar indeterminado. Pero si de todos modos se quiere que ese Tribunal no funcione sino con todos sus miembros, es necesario que se exprese con claridad para que no haya lugar á dudas.

El señor Funes: Es cierto que el art. 12 del proyecto del Honorable Senado establece que la Suprema Corte de Justicia podrá funcionar con la simple mayoría de sus miembros y un Fiscal; pero basta examinar el texto de la Constitución para comprender que importaría una violación de ella, establecer que ese Tribunal puede funcionar con cinco miembros solamente: porque la Constitución dice terminantemente en su art. 21 que el Poder Judicial de la Confederación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales, que residirá en la Capital, etc. Es claro, pues, que ese Tribunal no puede funcionar con menos personal que el que la Constitución le designa. Además de eso, por el artículo del proyecto que se discute, se establecerá que cuando en una causa se hallen impedidos para conocer uno ó mas Jueces de la Corte Suprema, serán llamados por su orden para reemplazarlos, el Presidente y Vocales de la Corte de Distrito de esta Capital; y en el caso que éstos estén también impedidos, los abogados residentes en la Capital, por su orden de antigüedad. Así los Jueces suplentes no son nombrados por el Gobierno ni por la Corte sino por la ley, de donde resulta evitar la parcialidad y al mismo tiempo las dilaciones que suele causar el nombramiento accidental de Jueces Suplentes. Como se vé, la Corte Suprema podrá funcionar siempre con sus nueve Jueces, porque si uno se ausenta ó está impedido, esta ley designará los que han de reemplazarlo. No hay comparación entre otros cuerpos colegiados y la Suprema Corte; porque aquellos solo funcionan por cierto tiempo y se componen de un gran número de miembros; pero la Suprema Corte es una corporación compuesta de muy pocos miembros. Hay una gran diferencia entre el modo de suplir á los miembros del Congreso y á los Jueces; si se requiriese indispensablemente el número completo de Diputados, sería casi imposible funcionar, porque en caso de faltar alguno era indispensable recurrir á nuevas elecciones; no así para suplir á los Jueces siendo llamados por la ley los suplentes. Como la Constitución exige que sean nueve Jueces, hasta en el mismo Congreso, se suscitaría alguna alarma, si la Suprema Corte de Justicia quedase reducida á cinco individuos; porque suponiendo que se tratase de resolver acerca de la constitucionalidad de una ley, si tres estaban por la negativa y

dos por la afirmativa, el fallo de tres hombres, vendría á decidir de la constitucionalidad de una ley. Véase, pues, como el artículo sancionado por el Honorable Senado, podría traer inconvenientes muy serios en la práctica para la recta Administración de Justicia.

La Comisión ha pesado estas observaciones, señor, y además de asegurar las mayores luces en la Suprema Corte, reconoce un deber sagrado de cumplir fielmente lo que prescribe la Constitución.

Por estas consideraciones no ha trepido en aconsejar la supresión del artículo sancionado por el Honorable Senado y la aprobación del que se discute.

El señor Ministro de Justicia: Exijo, señor, del Congreso que se determine bien este punto, porque es muy grave. Si se deja el artículo como ha sido presentado por la Comisión, no habrá uno que no crea que la mayoría basta para fallar, pero si se quiere que la Corte Suprema no pueda funcionar con cinco miembros, designe un número mayor, siete por ejemplo, porque exigir los nueve es demasiado; sería hacer imposible en muchos casos la reunión de ese tribunal, porque si una vez faltase un juez por una enfermedad del momento, ya no podría haber Corte en ese día, porque era necesario recurrir á los miembros de la Corte de Distrito para integrar aquella, y sería indispensable conceder á ese suplente un día por lo menos para instruirse del asunto que debía ocupar al Tribunal.

Por otra parte, señor, no hay riesgo que la Corte Suprema decida con cinco miembros de la inconstitucionalidad de una ley; porque es natural que en sus reglamentos se establezca que para fallar en asuntos de gravedad se reúnan los nueve jueces, aunque para decidir en asuntos de poco interés baste una simple mayoría. Pero estos son detalles que deben arreglarse cuando la Suprema Corte sancione su reglamento, y que no deben ser objeto de esta ley.

Repito, pues, que mi opinión es que basta la simple mayoría de Ministros para formar Corte, y que esto no se opone á la Constitución, si hemos de interpretarla como se ha interpretado al reglamentar el ejercicio del Poder Legislativo, pues á pesar de que la Constitución ha dicho: habrá un Congreso compuesto de tantos miembros designando el número de Diputados y Senadores, jamás se ha creído ninguna de las Cámaras impedida para funcionar con una simple mayoría.

Si hubiese, pues, conveniencia de que para decidir en ciertos asuntos graves ó dudosos asista un número mayor de Ministros,

la Suprema Corte lo establecerá así en su reglamento.

El señor Ferreira: He pedido la palabra para adherirme á la indicacion hecha por el señor Ministro sobre que se consigne en el artículo que la Suprema Corte de Justicia no podrá funcionar sinó con el número completo de sus miembros á fin de que no pueda haber duda alguna que dé lugar á interpretaciones.

Me adhiero, señor, á esa indicacion porque no es lo que prescribe la Carta y de ningún modo convendría á los intereses del país que en asuntos tan serios y de la mayor importancia, como son, sin duda, todos aquellos de que debe ocuparse dicho Tribunal, se interpretase la Constitucion en otro sentido que viniese á desvirtuar las garantías de la justicia y la fuerza moral de la opinion, tan indispensable para el buen éxito de las resoluciones del poder mas encumbrado de la Confederacion; pues que de su tino y sabiduría dependen la direccion acertada de los negocios mas delicados por su inmensa trascendencia sobre el bienestar de los pueblos y la difícil de la nave del Estado.

Yo no concibo cómo pueden consultarse debidamente fines tan vastos y escabrosos sin la concurrencia del pensamiento de uno solo de los jueces en las deliberaciones de la Corte; porque además de que la diferencia de un solo voto muchas veces hace tomar á los negocios rumbo opuesto al que debieran seguir, estaría incompleto el personal requerido por la Carta en seguridad del buen desempeño de la altísima mision que ha confiado al juicio reflexivo de la mayoría. Cuando la Constitucion la ha compuesto de nueve Jueces, ha exigido tambien que las medidas que de ella emanen sean el resultado de la meditacion y confrontacion de las ideas de todos, porque no ha establecido excepcion alguna, ni podrían de otra manera corresponder dignamente á la magnitud del encargo.

No encuentro fuerza en la observacion que el señor Ministro acaba de hacer sobre que no hay el menor inconveniente para que la ley determine el número de Jueces que deben funcionar desde que no lo ha fijado la Constitucion, así como para las sanciones del Congreso no se requiere el número total de Senadores y Diputados, porque no hay punto de verdadera comparacion entre una y otra institucion, desde que su objeto y atribuciones son muy diferentes.

Por otra parte, esta observacion mas bien sirve de argumento contrario, porque el artículo 53 determina el número de los miembros del Congreso que han de concurrir á la formacion de la ley, prescribiendo que ninguna de las Cámaras pueda entrar en sesion sin la mayoría absoluta de sus miembros; de modo

que no habiéndose designado el número de Jueces que han de intervenir en las decisiones de la Suprema Corte, debe entenderse que la mente de los legisladores ha sido que concurre la totalidad de sus miembros.

Pero aun cuando así no fuese, los constituyentes sabian muy bien cómo proceden los cuerpos deliberantes para la sancion de las leyes y han debido pensar que las disposiciones constitucionales serian interpretadas de un modo conforme á los usos y prácticas generalmente aceptadas en las naciones cultas, donde jamás se exige la asistencia del número absoluto. No así respecto del Tribunal Supremo: creáronlo componiéndolo de nueve magistrados, de este Poder inmenso, señor, sin antecedentes, ni otro modelo en América y Europa, que el de los Estados Unidos del Norte, dándoles atribuciones tan grandes, que de ellos dependen la prosperidad, la paz y hasta la conservacion de nuestro sistema político. Pues cuando no designaron número, claro está que quisieron garantizar el acierto de sus resoluciones con el juicio que resultase del pensamiento de los nueve y no del de una fraccion de los miembros que lo componían. Que sus fallos sean el producto de la meditacion reflexiva de los nueve Jueces, pronunciado por su mayoría absoluta, es lo que ha querido la Constitucion, y ninguna ley reglamentaria puede alterar una disposicion que encierra profunda prevision.

Quando la ley que se discute establece que las Cortes de distrito se compongan de tres Jueces y un Fiscal, no puede suponerse que la mira de los legisladores ha sido que puedan funcionar con menos personal. ¿Entonces por qué motivo podemos creernos autorizados para entender de otra manera la prescripcion constitucional que determina el personal de la Suprema?

A más de esto, si los nueve Jueces deben residir en la Capital ¿qué deben hacer si no se consagran enteramente á cumplir con la alta mision que ha confiado la Carta á su celo, laboriosidad y patriotismo? Mucho más cuando la Nacion debe compensar bien sus importantísimos servicios con la dotacion de los sueldos correspondientes á su elevado rango. La necesidad de hacerlo así es tanto más palpable, cuanto que el número de las causas que pueden venir al juzgamiento de la Corte Suprema será todavía muy poco por muchos años y esos nueve Jueces estarían desocupados la mayor parte de su tiempo.

No debemos, pues, acortar el número de los Jueces para garantir en lo posible los fallos de ese Tribunal que solo se apoya en la opinion que se forme el pueblo, para quien serán tanto mas respetables cuanto mayor sea el número de los miembros que contribuyan

con su juicio á prestigiarlos. Nosotros mismos, mañana no mas, cuando llegase el caso de que la Corte Suprema se negase á dar explicaciones á una ley, tacharíamos de erróneo su juicio, porque el pensamiento de tres individuos no puede inspirar igual grado de confianza para el acierto que el del Congreso.

Hay otra consideracion de la mayor importancia para que la Corte Suprema deba funcionar con el personal íntegro, cual es la de que tiene que ejercer en cierta manera la misma atribucion de la Corte de Casacion en Francia, interpretando la Constitucion y las leyes en los diferentes casos que ocurran, es decir, establecer la verdadera inteligencia de la legislacion para que su aplicacion práctica se haga expedita y uniforme.

¿Y cómo podrá resultar esa uniformidad si ha de ser desigual y aun distinto el personal de la Corte que ejerza su jurisdiccion? Sucedería lo mismo que en Chile, donde no es uniforme la práctica de las Cortes Superiores y se han visto algunas veces fallos contrarios sobre idénticos asuntos por haber variado solo el personal.

No olvidemos, señor, que la interpretacion uniforme de la legislacion constituye la regularidad de la jurisprudencia práctica, que tiene un infinito valor, por cuanto ella facilita la resolucion de los litigios y sirve de barrera á las sugerencias cavilosas de los mal intencionados; lo que no se podrá conseguir si tres ó cuatro Jueces han de dar hoy una sentencia que mañana será disconforme ó contraria á la que pronuncie el mismo Tribunal en casos análogos ó idénticos por razon de haberse reunido mayor número, que ha sido de distinta opinion.

Evitemos, pues, este inconveniente, si apetece para nuestros hijos y las generaciones venideras una legislacion clara por la uniformidad de su inteligencia; lo cual yo aprecio de tan grande importancia que creo que es el mejor y más rico patrimonio que pudiéramos legarles. Por estas consideraciones votaré por el artículo en la forma que está redactado.

El señor Araoz: Estoy muy conforme con el artículo tal cual lo ha presentado la Comision, es decir, que la Suprema Corte sea compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales que residan en la Capital; porque sancionar otra cosa, sería violar la Constitucion en su artículo 91, que lo prescribe así terminantemente. Pero no estoy conforme con lo que acaba de exponer uno de los miembros de la Comision, al sentar, que segun sus opiniones, la Suprema Corte no puede funcionar sin estar presentes sus nueve miembros. Estoy, pues, en oposicion á esa interpretacion que se hace del artículo 91 de la Carta, porque esa prescripcion no debe ni puede entenderse en su sen-

tido absoluto; pues aunque aquella expresa terminantemente que la Suprema Corte se compondrá de nueve Ministros, no se puede interpretar de modo que se haga imposible su cumplimiento, es decir, que no pueda funcionar sino con nueve en todos los casos. Si se enferman uno ó dos Ministros no podrá funcionar de ninguna manera: esto es claro, á estar por la doctrina y los deseos de la Comision.

El señor Funes: Podrá funcionar, señor Diputado, porque se ha previsto ese caso en el artículo 43 del proyecto.

El señor Araoz: Mas en mi favor, señor Diputado, porque si se prevé ese caso, es porque se reconoce que no es posible que estén siempre reunidos los nueve Ministros propietarios. Pero si para una causa en que no pudieran concurrir todos se llamasen suplentes, esto sería muy perjudicial en asuntos de vital importancia en que se trata de intereses muy sagrados; porque la premura del tiempo no les permitiría instruirse de todos los antecedentes con la profundidad que el asunto requiere. Está visto, pues, que no puede exigirse que asistan siempre los nueve Ministros para todos los casos aunque sean de mero trámite. Estoy, por consiguiente, conforme con la Comision en que se deje el artículo tal como está; pero creo como el señor Ministro, que la Suprema Corte puede funcionar con la mitad mas uno de sus miembros, siempre que no se trate de fallos definitivos. Esto sucede en ciertos cuerpos colegiados; y aunque la Constitucion no lo diga terminantemente, antes que interpretarla de un modo que sea imposible su cumplimiento, debemos estar á las conveniencias generales, toda vez que no se infrinja un principio de aquella.

El señor Ministro ha dicho, que así como el Congreso funciona con una simple mayoría, sería muy natural que la Corte de Justicia, como todos los cuerpos colegiados, ejerciese sus funciones con la mitad mas uno de sus miembros. No creo bueno ese ejemplo, señor, porque al hablar del Congreso, la Constitucion establece que podrá haber sesion con la mayoría absoluta de sus miembros, y de la Corte Suprema no dice lo mismo. Por consiguiente, ese argumento prueba mas bien en favor del artículo de la Comision; es decir, que el Poder Judicial será ejercido por nueve Jueces de conformidad al artículo 91 de aquella, y no por cinco como lo establece el artículo correspondiente de la sancion del Honorable Senado, en contra del cual estoy, y que dice así: «Artículo 12. La Suprema Corte de Justicia será compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales conforme al artículo 91 de la Constitucion; pero podrá ejercer sus funciones con la simple mayoría de sus miembros y un Fiscal». Esta, es señor, mas bien

una negacion del principio que se trata de establecer, porque en él se quiere consignar que la Suprema Corte pueda funcionar con cinco Ministros solamente; en cuyo caso, le queda á aquella el arbitrio de mandar cuatro de sus miembros á presidir las Cortes de Distrito, como pretenden establecerlo en el artículo 45, lo cual no puede ser, porque la Constitucion dice que residirán en la Capital, y esta es por consiguiente una condicion precisa é indispensable que no puede tener otro objeto, sino que todos los Jueces de la Corte Suprema funcionen en la Capital y no en las Cortes de Distrito.

No estoy, pues, conforme con el señor Ministro ni con la sancion del Honorable Senado, y sí con el artículo propuesto por la Comision; porque su artículo establece que los Jueces de la Suprema Corte se hallen siempre reunidos en esta Capital, para formar la Corte; y se consigue tambien lo que deseamos todos, es decir, que la Suprema Corte no funcione, sino con mas de cinco Ministros; porque si se exigiese que estén todos presentes, en muchos casos no se podría reunir aquella.

Creo, pues, que se puede adoptar este medio.

El señor Ministro de Justicia: Respecto á las consideraciones que acaba de emitir el señor Diputado preopinante sobre la ausencia de los Ministros de la Suprema Corte, cuando llegue el caso manifestaré que ese es un punto que el Gobierno no trata de sostener. Pero en cuanto al artículo que se discute, de todos modos debe fijarse, señor, con qué número de Ministros podrá funcionar la Corte; es indispensable hacer una aplicacion mas clara en el artículo, porque la redaccion de que *«la Suprema Corte de Justicia será ejercida por un Tribunal compuesto de nueve Jueces y dos Fiscales»* no explica que no pueda funcionar con ocho ó con siete, por ejemplo. Este será al menos el espíritu con que se explique el artículo; porque como he dicho antes, cuando se trata de cuerpos colegiados la mayoría hace las funciones del todo: esta es una regla general. Sostengo, pues, que si se quiere que la Corte Suprema no pueda funcionar sino con el número absoluto de sus miembros, es preciso que lo diga bien claro el artículo, y si con menos, tambien.

Un señor Diputado ha indicado que si se estableciese que la Suprema Corte pudiera funcionar con una simple mayoría sería fomentar la holgazanería de ciertos Jueces. Pero señor...

El señor Ferreyra: He dicho que no era difícil que asistiesen todos porque tendrían pocos asuntos de que ocuparse.

El señor Ministro continuó: Se deduce al menos de las palabras del señor Diputado, que eso era favorecer la holgazanería de los que

no asistiesen sin motivo justificado á la Corte. ¿Y pretende entonces el señor Diputado que la inasistencia de uno, aun justificada, deje á los ocho restantes que hubieren asistido en la imposibilidad de trabajar?

¿Quiere hacer en ese caso ocho holgazanes en lugar de uno ó dos?

Pero el señor Diputado informante cree que este artículo está completamente con el 43 que dice: que *cuando se hallen impedidos los Jueces de la Corte Suprema serán llamados por su orden para reemplazarlos el Presidente y Vocales de la Corte de Distrito*. Pero esos supientes no pueden entrar á funcionar inmediatamente, es necesario concederles un día, por lo menos, para que tomen el conocimiento necesario del asunto sobre que van á fallar. Bien, pues, si al día siguiente se halla impedido otro Juez sería necesario retardar nuevamente el conocimiento de ese asunto, y el señor Diputado sabe cuanto mal puede causar el retardo de ciertos asuntos ó el reemplazo de un Juez. Véase, pues, como no es conveniente que la Honorable Cámara, sancionado este artículo en la forma que lo presenta la Comision, sostenga como principio que la Corte Suprema necesita el número absoluto de sus Jueces para ejercer sus funciones. Pero si no se exige esto, es necesario que se exprese con claridad lo que se quiere establecer, porque el artículo no lo explica.

El señor Ferreyra: No dejo de conocer que son juiciosas algunas de las observaciones hechas por el señor Ministro, pero no las creo tan poderosas que basten para variar la disposicion del artículo que se discute en la parte principal relativa al número de Jueces que deben ejercer las funciones de la Suprema Corte, por cuanto no importa otra cosa que consagrar las garantías que la Constitucion ha establecido en favor de la mejor expedicion y acierto de sus resoluciones.

Los inconvenientes que se han manifestado no son tan frecuentes ni tan graves en la práctica de los negocios judiciales como quizá aparecen en la teoría. Por otra parte, esas dificultades son anexas á todos los cuerpos colegiados, bien sean deliberantes ó Tribunales de Justicia; de modo que si hubiéramos de darles un valor tal que las convirtiera en un verdadero obstáculo, sería preciso renunciar la idea de tener buenas instituciones, mientras que la experiencia de lo que pasa en otros pueblos nos demuestra lo contrario.

La objecion de que la Constitucion no ha fijado el número de los Jueces que deben ejercer la jurisdiccion que compete á la Corte Suprema, no es un argumento atendible, porque basta que ella haya designado los miembros de que debe componerse.

No tengo noticia de que en ninguna parte,

cuando se han creado los Tribunales de Justicia y se ha designado el personal que debe componerlos, haya sido necesario expresar tambien que han de ejercer sus funciones con todos los miembros de que se componen, porque esto ya se entiende desde que es un consiguiente preciso de tal antecedente, como que constituye el objeto del nombramiento de los Jueces. Así en Chile, por ejemplo, que bien merece citarse como modelo en la América del Sud por su régimen constitucional, los Tribunales superiores y la misma Corte Suprema se componen de cinco Jueces determinados por la ley de su erección y funcionan con todo el personal, sin que haya sido preciso consignarlo por una disposición especial, de modo que las sentencias de estos Tribunales son siempre la expresión del juicio de la mayoría de los cinco, formado por la discusión del pensamiento de todos. Esto es lo que yo entiendo que ha establecido la Constitución componiendo la Corte Suprema de nueve Jueces, es decir, que no pueda conocer y fallar sino con la mayoría absoluta de sus miembros, sin que sea necesario que lo exprese, en razón de ser un principio eterno de la Justicia humana que la mayoría en cuerpos colegiados hace y aplica la ley en todas partes.

Tampoco me parece grave la otra dificultad que se ha hecho presente sobre el retardo que ocasionaría en el despacho la necesidad de llamar suplentes para reemplazar los miembros natos del Tribunal, en caso de hallarse impedidos; porque, en primer lugar, debemos suponer que la delicadeza y pundonor de tan altos funcionarios harán muy raros semejantes accidentes, y en segundo lugar, aun cuando así no fuese por algunos otros motivos, la ley que se discute ha previsto estos inconvenientes, poniendo á la mano el remedio con los Jueces de la Corte de Distrito y abogados que residan en la Capital; pues teniéndolos tan inmediatos no hay razón alguna para temer que en el caso de hallarse impedido alguno de los Ministros para asistir al despacho, descuide el deber de comunicarlo con anticipación al Regente ó Presidente de la Corte para que éste llame oportunamente al que debe reemplazarlo.

Mas no me opondré como miembro de la Comisión á que, si no obstante lo expuesto se juzga que es deficiente la redacción del artículo como ésta lo ha presentado, se modifique á fin de consultar mayor claridad, con que no se altere en nada su sentido.

Aceptaré, por consiguiente, la enmienda que el señor Ministro ó alguno de los señores Diputados quiera proponer al objeto indicado.

El señor Ministro de Justicia: Deseo ante todo, señor, que se redacte con la mayor cla-

ridad este artículo para que no se susciten dudas que pueden traer inconvenientes muy graves cuando se instale la Suprema Corte.

He dicho antes que si la Honorable Cámara decide que no puede haber Corte sin la presencia de los nueve Ministros, se hará muy difícil sino imposible el ejercicio de las funciones de ese Tribunal, porque cuando un Juez esté impedido se llamará al Presidente del Tribunal de Distrito, y cuando el asunto sea grave sucederá una de dos cosas: ó se obligará á ese Juez á improvisar un juicio sobre un asunto de la mayor gravedad, que, por lo mismo, requiere un estudio detenido, ó se le dará el tiempo necesario para estudiar detenidamente una materia que no conoce; y si cuando ha estudiado bien los autos, ha mejorado ya ó puede asistir el propietario, se habrá perdido mucho tiempo; sin contar con la posibilidad de que mientras tanto, se imposibiliten otros Ministros que tambien sea necesario reemplazar con otros que necesiten plazos para instruirse de la causa. Esta es la práctica de los negocios, señor, y es por eso que creo se hará imposible el ejercicio cotidiano de las funciones de la Suprema Corte, si se exige una estrictez tan grande que no se le permita funcionar sino con el número absoluto de sus miembros.

Por esta razón insistiré siempre en que el Congreso no debe exigir la concurrencia de los nueve Jueces, si no quiere exponerse á que la Corte Suprema no despache ó despache mal.

El señor Funes: He pedido la palabra solo para hacer notar algunas inexactitudes. Se dice que llegado el caso de que se halle inhabilitado un Juez de la Corte Suprema, será muy difícil reemplazarlo. Sería muy difícil, señor, cuando el Tribunal ó el Gobierno designaren la persona que debía reemplazarle, pero no cuando la ley señala los suplentes hasta la escala mas remota; en el primer caso, pues, sería muy difícil reemplazar un Juez, porque todos tendrían la libertad de excusarse; pero en el segundo es muy fácil, desde que la ley dice: si tal Juez no puede sustituir á un Ministro de la Corte venga tal otro. Por esto la Comisión ha creído que ni se pierde tiempo en el reemplazo de los Jueces de la Suprema Corte, ni hay lugar á que se excusen de asistir los suplentes, porque la misma ley los nombra y los manda.

El ejemplo que se ha aducido de que la mayoría en el Congreso basta para sancionar la ley, es inconducente y nada prueba en este caso. El señor Ministro debe observar que á los Diputados no los nombramos nosotros sino el pueblo, y que por consiguiente, el Congreso debe funcionar con los que asistan siempre que haya mayoría; porque esto

es lo único que prescribe la Constitución; pero no están en el mismo caso los Jueces de la Corte, que son nombrados por el Gobierno con el acuerdo de la Cámara de Senadores, y que deben ser nueve y residir en la Capital, como lo prescribe el artículo 91 de la Constitución. ¿Qué necesidad hay, pues, de faltar á las prescripciones de ésta? Si uno de los Jueces de la Corte se halla impedido, ya he dicho que esta ley ha previsto ese caso, y que aquel puede ser reemplazado por cualquiera de los miembros de la Corte de Distrito, y en su defecto, por alguno de los abogados residentes en la Capital. Véase pues que la Suprema Corte no puede dejar de funcionar por falta de suplentes. Por consiguiente, el señor Ministro no debe abrigar temor alguno de que se entorpezca la administración de Justicia.

Se ha dicho que cuando un Juez se halle impedido, se deberá dar al que lo reemplace el término suficiente para que estudie los autos, y que con ese motivo se retardaría algunos días el fallo de la Corte. Los Jueces no ven los autos, señor, sino en materias criminales; porque en los demás casos se hace una relación del proceso; relación que en derecho está suficientemente garantida por el conocimiento de los interesados. Con el conocimiento que reciben los Jueces para la relación del pleito, é informe verbal que tiene lugar ante el Tribunal, proceden á resolver en dichos asuntos. Por consiguiente, ninguna dilación se ocasionaría, siempre que fuese necesario integrar el Tribunal con algun suplente, y estarían perfectamente garantidos los derechos de los litigantes.

Se hizo un cuarto intermedio.

Vueltos los señores Diputados á sus asientos, el señor Araoz dijo: Al oponerme á que se exigiese en el artículo que se discute, que la Corte Suprema no podría funcionar sin la asistencia de todos sus miembros, lo hice sin tener en vista el artículo 43 del proyecto que ha previsto todos los casos de impedimento de los Jueces; pero durante el cuarto intermedio he quedado convencido de las ventajas que ofrece el artículo, con las luminosas razones que he oído emitir en su apoyo á los miembros de la Comisión y con la lectura de aquel. Por consiguiente apoyaré la modificación que va á presentar la Comisión.

El señor Alvear: Como la discusión que nos ocupa es de la mayor importancia, y desearía hablar sobre ella, hago moción para que se levante la sesión por ser la hora avanzada, y se suspenda la discusión de este artículo hasta la sesión próxima. Fué suficientemente apoyada esta moción y habiéndose votado sobre ella resultó la negativa por mayoría.

El señor García hizo moción para que se

diese el punto por suficientemente discutido.

Fué suficientemente apoyada esta moción.

El señor Alvear dijo: Había hecho moción para que se postergase la discusión de este asunto para explicar algunas dudas que he concebido en la discusión; pero como la Honorable Cámara no ha deferido á que se suspenda aquella, me limitaré á exponer que votaré en contra del artículo porque me asisten algunas dudas sobre su conveniencia.

El señor Presidente expuso: Que estaba en discusión la moción hecha por el señor Diputado García.

El señor García retiró su moción.

El señor Funes pidió se leyese el artículo tal como lo había modificado últimamente la Comisión; su tenor es el siguiente: «Artículo 12. La Suprema Corte de Justicia será compuesta de nueve Jueces y dos fiscales que residirán en la Capital conforme al artículo 91 de la Constitución. Solo con este número hará Tribunal.»

El señor Alvear dijo: Estoy mas conforme con el artículo del Honorable Senado que con el que se discute, á pesar de la adición con que lo ha presentado últimamente la Comisión. No creo, señor, que adoptando el artículo del Honorable Senado hayamos falseado la prescripción constitucional; porque la Constitución exige solo que este Tribunal se componga de nueve Jueces y resida en la Capital, es decir, el Tribunal, no todos los Jueces. Bien pues, el artículo propuesto últimamente por la Comisión hace imposible el ejercicio de ese Tribunal, y en el propósito de verlo funcionar con el número completo de sus miembros, vamos á inutilizarlo; porque la idea de llamar suplentes es un recurso tan peligroso, que llegará sin duda á ser completamente ineficaz. Yo aceptaría mas bien que ese Tribunal funcione con la mayoría de sus miembros, antes que exigir perentoriamente el número material, permitiendo así que se introduzcan en su seno esos suplentes que, no invistiendo el carácter de los Ministros de la Suprema Corte ni su inamovilidad, no pueden ofrecer en manera alguna las garantías de imparcialidad y acierto que los otros. Luego la Constitución no puede exigir, señor, ese materialismo de la presencia de todos los Jueces para que el Tribunal pueda funcionar, porque esto no se exige en ningún cuerpo colegiado; y si aquella no puede exigirlo, debemos adoptar la teoría general de que la mayoría basta para formar número.

Votaré tambien en oposición al artículo que propone la Comisión porque es contrario al del proyecto originario, que acuerda á la Suprema Corte la facultad de disponer de algunos de sus miembros para mandarlos á pre-

sidir las Cortes de Distrito. Esto es esencial, señor, porque las luces y el talento práctico para aplicar la ley, que debe distinguirse á los Ministros como en el seno mismo de ese alto Tribunal, y negarle la facultad de disponer de algunos de sus miembros para llevar á los Tribunales inferiores el contingente de sus luces, es atarle completamente las manos; es quitarle imprudentemente los medios de que él solo puede disponer para aplicarlos en los casos más graves; es quitar á los Tribunales de Justicia la calidad mas esencial en todos ellos, la imparcialidad, que es la garantía de su acierto y de los derechos del ciudadano; porque hay una gran diferencia sin duda de cuando éste vá á ser juzgado por un magistrado sin relaciones en la localidad en que se halla, de cuando la Justicia está representada por un individuo de esa localidad, que muchas veces se ve en la necesidad de obrar bajo la influencia de los suyos. Creo, pues, que la Suprema Corte puede disponer de algunos de sus ministros para mandarlos en comision á presidir temporalmente las Cortes de Distrito segun la gravedad de los casos.

Por otra parte, señor, no solo en nuestro país tan nuevo en donde no se puede exigir la abundancia de luces, sino en otros más antiguos, es difícil contar con un número tal de hombres de ilustracion é independencia cual se requiere para estos casos. Creo, pues, conveniente que se deje á la Suprema Corte el arbitrio de concurrir con sus luces en los fallos de las Cortes de Distrito.

El señor Garzon: He pedido la palabra con el objeto de manifestar mi opinion respecto del artículo presentado por la Comision. Creo como ella, que deben ser nueve los Jueces que compongan la Corte Suprema, y nueve los que resuelvan en todos los asuntos; porque la Constitucion ha sido muy explícita cuando dice: «Artículo 95. El Poder Judicial de la Confederacion será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, compuesta de nueve Jueces y dos fiscales, que residirá en la Capital, etc.» La Carta supone, pues, que esos nueve Jueces deben estar permanentemente en la Capital, al mismo tiempo que las resoluciones de ese Tribunal no pueden ser dictadas sino por una mayoría uniforme de cinco miembros; porque de lo contrario habríamos librado la interpretacion de la ley al voto de dos ó tres hombres como lo establece el artículo del Honorable Senado y el originario del Poder Ejecutivo. Es claro, pues, que por el artículo que se discute quedan mejor garantidos los derechos del ciudadano, las leyes y la Constitucion misma.

Por otra parte, señor, si la Honorable Cámara y el Congreso aceptan este artículo, debemos creer que la uniformidad en la inter-

pretacion de la ley sería siempre práctica porque nacería de una mayoría de cinco Jueces, que no podría variar en sus opiniones como una de tres ó de dos, en el caso de que se apruebe el artículo del Honorable Senado, que deja á la Suprema Corte la libertad de alejar de su seno hasta la mitad de sus miembros, que importa la libertad de hacer lo que se le antoje, porque una mayoría organizada tendría la facultad de alejar de sí á la minoría que combatía sus opiniones. Por otra parte, señor, los inconvenientes que se han aducido sobre la dificultad de que asistan todos los miembros de la Suprema Corte en todos los casos en que aquella debe pronunciar un fallo, no tienen fuerza alguna, porque esta ley ha previsto todos los casos, y cuando un Juez esté impedido vendrá inmediatamente el suplente que designa la ley hasta la escala mas remota. Esto en cuanto á la sentencia definitiva. En cuanto á la interlocutoria el reglamento de procedimientos que dicte la Corte reglará los casos en que aquella deba funcionar con todos sus Ministros.

Estas son, señor, las razones que tengo para votar en favor del artículo propuesto por la Comision.

El señor Ferreyra: Contestaré brevemente á las observaciones hechas por un señor Diputado por Corrientes. El señor Diputado ha objetado el artículo que se discute aduciendo como argumento los inconvenientes que se presentarían en la práctica para que la Suprema Corte pudiera funcionar con el número completo de sus Ministros. Como ya se ha contestado victoriosamente á este argumento por el miembro informante de la Comision y algun otro señor Diputado, me contraeré á los otros puntos que ha tocado el señor Diputado á quien contesto.

El señor Diputado ha dicho que los suplentes que la ley designa no pueden ofrecer las garantías de imparcialidad y acierto que los ministros de la Corte. Pero, señor, de ningun modo tenemos derecho á suponer que esos Jueces sean indignos y que fallen contra su conciencia cuando vayan á suplir á los miembros de la Suprema Corte. Además, el espíritu de la Constitucion es principalmente que el juicio de ese Tribunal sea prestigioso y garantido por las luces de nueve Jueces en la discusion de todos los asuntos. Me ha movido mas á tomar la palabra el señor Diputado, porque apoya el artículo del Honorable Senado que no solo hace pedazos la Constitucion, sino que inutiliza á ese Tribunal reduciéndole á fallar con una mayoría de tres Jueces, mayoría, señor, á quien se le conceden las facultades extraordinarias porque se le da la de alejar de su seno á los que no sean de su opinion. No sé pues cómo se quiere resistir

una prescripcion terminante de la Constitucion.

El señor Alvear: La Constitucion, señor, prescribe que la Corte resida en la Capital, pero esa prescripcion no se refiere á todos los Jueces.

El señor Ferreyra: ¡Estamos buenos! ¿Cuando se habla del todo no se hace referencia á las partes? ¿Las leyes que reglan la Corte Suprema no reglan á los ministros de ella? ¿Que lógica es esa, señor?

El señor Ministro: Una observacion hecha por un señor Diputado en apoyo de este artículo me ha sugerido una nueva redaccion que voy á proponer á la Honorable Cámara. El señor Diputado ha dicho que cuando la Comision exigía que la Suprema Corte no pudiese funcionar sino con todos sus miembros, era para que cuando menos no pudiese haber fallo que no tuviese cinco votos. Yo redargüiría al señor Diputado entonces diciendo: si la Constitucion solo exige cinco votos uniformes para hacer resolucion, ¿por qué se exigen nueve Jueces precisamente, cuando los cinco votos uniformes pueden hallarse entre 5, 6, 7 ú 8 Jueces concurrentes? Siguiendo, pues, sus ideas, si lo único que se exige es una mayoría de cinco votos uniformes en las resoluciones de la Suprema Corte, creo que la Comision aceptará el artículo en esta forma: «La Suprema Corte de Justicia será compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales, que residirán en la Capital conforme al artículo 91 de la Constitucion. Cinco votos uniformes harán resolucion». Esta redaccion llena los deseos de la Comision puesto que lo que se quiere es que la Suprema Corte no falle jamás con menos de cinco votos uniformes. Pero si se exige la asistencia material de los nueve ministros se exigirá una circunstancia muy gravosa para que la Suprema Corte pueda funcionar constantemente y con la brevedad posible y en muchos casos innecesaria, segun la Constitucion.

El señor Quesada: Aunque alguna vez me he opuesto á que se adopten las doctrinas Norte-Americanas sobre la Justicia Federal, porque entre nosotros no creo que deban aplicarse, sin embargo, como veo que se han aceptado en esta materia, creo que sería ló-

gico ensayar la organizacion de Justicia Federal como en los Estados Unidos, es decir, que la Suprema Corte funcione periódicamente, y sus miembros pasen en el tiempo del receso á presidir las Cortes de Distrito. Pero como esto es imposible que se verifique si se aprueba el artículo presentado por la Comision votaré por el artículo del proyecto del Ejecutivo.

El señor Garzon: He pedido la palabra para contestar á las observaciones que ha hecho últimamente el señor Ministro. Ha dicho que lo único que se exige en una mayoría de cinco votos uniformes para los fallos de la Suprema Corte. He dicho, señor, que cuando menos debe haber una mayoría de cinco votos uniformes, y esto importa tanto como decir, que la sentencia no puede pasar por tal si no hay cinco votos uniformes por lo menos; pero si solo asistieran siete ú ocho Ministros es claro que no podría haber mayoría de cinco. Por consiguiente, la que designa la Constitucion.

El señor Funes adujo algunas observaciones en contestacion á lo expuesto por el señor Quesada tendentes á probar que no podía adoptarse el sistema de administracion de Justicia de Norte-América, porque la Corte Suprema debía residir constantemente en la Capital de conformidad al artículo 91 de la Constitucion.

El señor Quesada observó que él habia aconsejado ese sistema en el supuesto de que la Corte Suprema no residiese todo el año en la Capital.

El señor Gordillo hizo mocion para que se diese el punto por suficientemente discutido, y habiendo sido suficientemente apoyada esta mocion se procedió á votar sobre ella, y resultó la afirmativa por mayoría.

Puesto á votacion el artículo 12 en la forma en que lo habia presentado últimamente la Comision, fué aprobado por mayoría.

Acto continuo se levantó la sesion siendo las cuatro y media de la tarde.

M. LUQUE.

Benjamin de Igarzabal,
Secretario.